realidad económica
Nº 383 AÑO 56
1° de octubre al 15 de noviembre de 2026
ISSN 0325-1926

Páginas 97 a 135

HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA

La política económica de Alfonsín (1983-1989). Hallazgos y sugerencias para futuras investigaciones*

Ignacio Andrés Rossi**

* Se expresa un agradecimiento a la doctora Karina Forcinito por su lecturas, comentarios críticos y dirección del proyecto de investigación doctoral en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), financiado por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

** Doctorando en Ciencias Sociales (UNGS), magíster en Historia Contemporánea (UNGS), Juan María Gutiérrez 1150 (entre José León Suarez y Verdi) (1613), Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina, ignacio.a.rossi@outlook.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3870-1630.

RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: marzo de 2026
ACEPTACIÓN: junio de 2026

Resumen

El periodo histórico de transición democrático y gobierno de Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989 fue un momento clave de construcción y avance del neoliberalismo. La historia económica tiene aún mucho que aportar a la comprensión de los acontecimientos más relevantes para entender la economía política del periodo. A partir de la jerarquización de los estudios existentes, el trabajo realiza un abordaje histórico y económico sobre los principales episodios de la política económica, como los planes de estabilización, las iniciativas de reformas estructurales y las restricciones políticas y macroeconómicas. Los objetivos centrales de este abordaje son los de ordenar y analizar el conocimiento existente, pero también proveer interpretaciones y materiales de archivo para futuras indagaciones y en el marco de un proyecto de investigación amplio.

Palabras clave: Deuda externa – Inflación – Democracia – Reformas estructurales

Abstract

Alfonsín's Economic Policy (1983–1989): Findings and Directions for Future Research

Argentina's democratic transition and Raúl Alfonsín's presidency (1983–1989) marked a pivotal period in the emergence and advance of neoliberalism. Economic history still has much to contribute to our understanding of the key developments that shaped the political economy of this period. Drawing on a critical assessment of the existing literature, this article offers a historical and economic analysis of major economic policy episodes, including stabilization plans, structural reform initiatives, and political and macroeconomic constraints. Its primary objectives are to organize and analyze existing scholarship and, as part of a broader research project, to offer interpretations and archival materials that can inform future research.

Keywords: External debt – Inflation – Democracy – Structural reforms

Introducción

La transición a la democracia en la Argentina de 1983 se produjo en un contexto sociopolítico de favorables expectativas respecto de la resolución de los problemas económicos heredados (Novaro, 2009). Así, el gobierno democrático de la Unión Cívica Radical (UCR), bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, asumió con ambiciosos objetivos de reformas, como la investigación y los juzgamientos de los crímenes de lesa humanidad, la democratización de amplios espacios sociales, la promesa de investigar la deuda externa y el intento de reforma sindical –conocido como Ley Mucci–, entre otros (Godio, 1991; Crenzel, 2025). El Partido Justicialista es vencido por primera vez en la historia con un discurso político de defensa de la democracia y el Estado de derecho; el alfonsinismo sentó de este modo una ruptura con la dictadura previa (1976-1983) (Aboy Carlés, 2001). El desprestigio del régimen saliente y el optimismo del clima de apertura político hizo subestimar las agudas limitaciones económicas. La deuda externa llegó a los inéditos 45.000 millones de dólares, el déficit fiscal –incluyendo el del Banco Central de la República Argentina (BCRA)– era del 15% del PBI, la inflación estaba en niveles del 350% anualizada y las demandas de la clase trabajadora, que había perdido un 30% de sus ingresos desde 1975, eran urgentes (Rapoport, 2020; Zack y Pryluka, 2022).

Una parte importante de la literatura heterodoxa de las ciencias sociales identificó que estos desequilibrios se originaron en la reestructuración económica impulsada por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981) (Schvarzer, 1986; Castellani, 2006). Las reformas estructurales –comercial, financiera, del Estado y de liberación de precios– impulsadas por este intentaron desestructurar la lógica de industrialización por sustitución de importaciones vigente desde la segunda posguerra, en un cuadro de crisis global del keynesianismo. La lucha contra la clase trabajadora fue parte central de las reformas liberalizadoras que se llevaron a cabo y que sentaron un modelo de mayor especulación financiera,

concentración del capital y desindustrialización (Zícari, 2025). El contexto internacional, por su parte, estaba atravesado por las crisis del petróleo y el fin de las normas regulatorias de Bretton Woods, y planteaba limitaciones que se extremaron con la crisis de la deuda externa desde 1982. La suba de las tasas de interés de Estados Unidos disparó un contexto recesivo en el que el proteccionismo de los países desarrollados y la caída de los términos de intercambio agravaron la coyuntura para los países latinoamericanos con un alto ratio de endeudamiento externo (Ocampo, 2014).

En este marco, el gobierno de Alfonsín debió lidiar en el plano de la política económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los acreedores externos y los principales grupos económicos nacionales y extranjeros beneficiados por la estatización de la deuda externa, los regímenes de promoción industrial y el retroceso de los ingresos de los sectores populares (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1987; Ostiguy, 1990; Birle, 1997; Schorr, 2021).[1] La primera iniciativa económica fue liderada por el ministro Bernardo Grinspun (1983-1985), un histórico radical de perfil estructuralista, quien intentó reactivar la economía, mantener los salarios reales por encima de la inflación y presionar a los acreedores externos y al FMI por mejores condiciones de negociación externa. Sin embargo, el descontrol de la inflación y el incumplimiento del acuerdo con el FMI hacia fines de 1984 propició la llegada de Juan Sourrouille al Ministerio de Economía (1985-1989). Este, junto con sus colaboradores Adolfo Canitrot, Roberto Frenkel, José Luis Machinea y Mario Brodersohn (Torre, 2021), formuló el plan de estabilización Austral. El programa, que contó con una política de congelamiento de *shock* y un acuerdo con el FMI, combinando medidas ortodoxas y heterodoxas, permitió al gobierno una nueva etapa sobre la base de menores niveles de inflación. Sin embargo, la persistencia de las limitaciones estructurales limitó la gestión económica a sucesivas políticas de estabilización e intentos truncos de reforma económica (Gerchunoff y Llach, 2019). Por ejemplo, persistió el alto déficit fiscal, las presiones

[1] Se trataba de sobrecompras y exenciones impositivas enmarcadas en los regímenes de promoción y de los seguros de cambio para pesificar deuda externa. Las estimaciones se contabilizaron en 35.000 millones de dólares equivalentes para los regímenes de promoción entre 1983-1989 y 9000 millones de dólares que habrían sido transferidos al Estado en concepto de seguros de cambio (Basualdo, 2006).

por las negociaciones externas y la puja distributiva entre capital y trabajo (Belini y Korol, 2020). En esta coyuntura, los intentos por emprender privatizaciones y discutir la estructura arancelaria del comercio exterior entre 1986 y 1987 provinieron tanto de las filas del radicalismo como del FMI y el Banco Mundial (BM) (Bacha y Feinberg, 1989). Por esto, las tensiones fueron relevantes en este periodo y llegaron a un punto límite con el último plan de estabilización llamado Plan Primavera hacia 1988 y en un cuadro de descontrol inflacionario. A partir de este, se adoptó la estrategia de estabilización y reforma provista por el BM[2] centrada en dinamizar la oferta (Bouzas, Keifman y Etchegaray, 1987). En un marco de tensiones con el FMI derivado de la persistencia de la crisis de la deuda externa y de las "condicionalidades cruzadas" entre los organismos internacionales (Botzman y Tussie, 1989), el gobierno tomó mayor compromiso por avanzar en el sendero reformista.

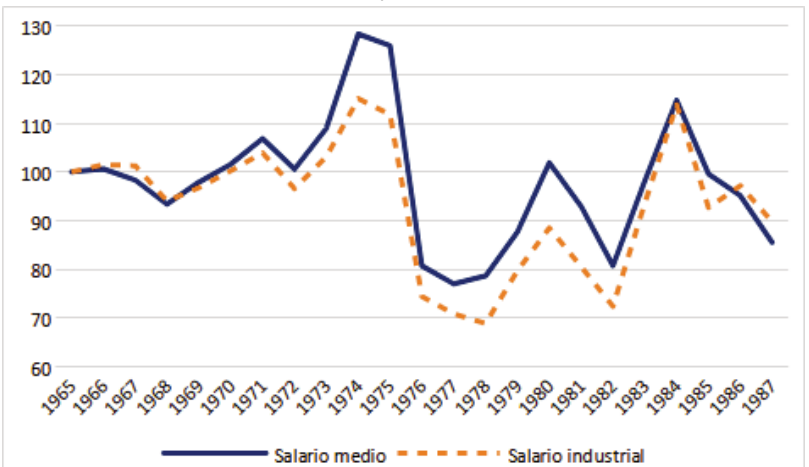
En este cuadro, el trabajo propone retener los principales procesos de la economía política, particularmente los que involucran la política económica del periodo 1983-1989, destacando episodios relevantes, aportes novedosos, bibliografía especializada y fuentes e hipótesis para futuras investigaciones. El trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio e intenta, en el marco del mismo, ofrecer una síntesis. La metodología de trabajo es histórica, en la medida que se sustenta en el análisis empírico de fuentes de archivo de diversa naturaleza y adopta teóricamente un enfoque sustentado en la economía política crítica que da cuenta de las tensiones sociohistóricas, las pujas distributivas entre capital y trabajo, el rol del Estado y las particularidades del capitalismo nacional, el papel de las elites, los empresarios, los organismos internacionales y los sectores populares, los fenómenos macroeconómicos y la dinámica de la economía nacional en el marco general del capitalismo global (Calcagno, 1985; Schvarzer, 1986; Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1987; Ferrer, 2004; Thwaites Rey, 2005; Basualdo, 2006; Brenta, 2019; Ortiz y Schorr, 2021; Zícari, 2025).

[2] En el marco de una "segunda fase" en el tratamiento de la deuda externa por parte de las autoridades financieras internacionales desde el llamado Plan Baker impulsado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos James Baker. Este tenía el fin de volcar financiamiento regional por 9000 millones de dólares entre el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros 20.000 millones provenientes de bancos comerciales para avanzar en reformas económicas.

Los planes económicos de la democracia y sus impactos

En materia económica, el diagnóstico de Grinspun puso en el centro de su Plan Económico la necesidad de actuar sobre los desequilibrios macroeconómicos heredados, cuya primera manifestación era la espiral inflacionaria. Con una política antinflacionaria gradual, como veremos, se debía actuar sobre la caída de la eficiencia global de la economía provocada por el predominio de las excesivas ganancias financieras por sobre las productivas y sobre la "ineficiente redistribución del ingreso" provocada por la concentración de capitales derivada de la desindustrialización, el achicamiento del mercado interno y la fuga de capitales (Grinspun, 1989: 23). Una política económica que abordara estos puntos sería coincidente con los planteos plasmados en la plataforma electoral de la UCR, que previamente a la asunción electoral había jerarquizado la recuperación de los ingresos de la clase trabajadora que, como puede verse en el gráfico 1, se encontraba por debajo de los niveles de 1965 y muy lejos de los máximos de 1974. También se planteó como importante la recomposición de la inversión productiva, el crecimiento y la reindustrialización (UCR, 30/7/1983).

Gráfico 1.
Evolución del salario medio y del salario industrial, 1965-1987



Fuente: elaboración propia sobre la base de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1989)

Las influencias intelectuales de su programa, según sugirieron de algunos trabajos (Rossi, 2024, 2025), provinieron de los aportes intelectuales de Ferrer, por un lado, y Schvarzer, por el otro. El primero formuló, en aquel entonces, una serie de propuestas que plantearon la importancia de limitar los pagos por intereses de la deuda externa, reactivar la capacidad ociosa, jerarquizar una reforma financiera y tributaria y consolidar un programa antiinflacionario con base en la concertación política democrática (Ferrer, 1983). Desde los tiempos de la Multipartidaria y posterior a la Guerra de Malvinas, Ferrer venía siendo una influencia en el radicalismo en el Instituto del Desarrollo Económico y Social (IDES)[3] Por su parte, Schvarzer –economista de menor influencia política– venía desde el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Sociedad (CISEA), un *think thank* que apoyó la candidatura alfonsinista con la formulación de una serie de ideas económicas. Entre las principales, identificó las limitaciones que los grupos económicos concentrados ejercerían sobre la democracia, particularmente sobre variables clave de la economía como los ingresos tributarios, la inflación y el precio del dólar. También advirtió que la confrontación con estos debía ser un elemento central en el gobierno, ya que de lo contrario los cambios estructurales operados en la economía desde el Plan Martínez de Hoz llevarían, finalmente y como sucedió, el intento de Grinspun al fracaso (Schvarzer, 1983 y 1984).

En este marco, el ministro de Economía delineó que en el corto plazo se debía aprovechar la disponibilidad de la capacidad industrial instalada ociosa de aproximadamente un 30%, de la mano de obra provocada por las altas tasas de desocupación abierta y de subempleo visible (cuentapropismo) forzado por la desindustrialización previa, de un desarrollado mercado interno con capacidad de respuesta al aumento inmediato del ingreso medio de la población (Pesce, 2006) y de las exportaciones primarias con el fin de evitar una crisis de balance de pagos. Este último punto era central porque, como se observa en el cuadro 1, los intereses de la deuda superaban el saldo comercial y las reservas disponibles en el BCRA eran negativas. Por esto, argumentaba el ministro, se debían enfrentar las negociaciones externas en mejores condiciones (Grinspun, 1989: 25) y renegociarse la exagerada deuda externa, atendiendo a su volumen, mala estructura de vencimientos sin refinanciar y altas tasas de interés mientras que paralelamente se

[3] Referido por Rovelli en una comunicación personal realizada el 22 de julio de 2024 en Buenos Aires.

Cuadro 1.
Exportaciones, importaciones, saldo comercial, reservas internacionales netas e intereses de la deuda externa en millones de dólares, 1980-1989

AÑO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	BALANZA COMERCIAL	INTERESES	RESERVAS
1980	8021	10541	-2519	1531	-2796
1981	9143	9430	-287	3699	-3806
1982	7625	5337	2288	4767	-651
1983	7836	4504	3332	5863	-2572
1984	8107	4585	3523	5801	-1744
1985	8396	3814	4582	5385	-556
1986	6852	4724	2128	4648	-2075
1987	6360	5818	542	4363	-4100
1988	9135	5322	3813	4899	-1381
1989	9579	4203	5376	s/d	3419

Fuente: elaboración propia sobre la base de MRE (2024) y memorias del BCRA (1980 y 1988)

atacaba la alta inflación. En el diagnóstico de Grinspun, la inflación derivaba del estrangulamiento externo generado por la deuda y la fuga de capitales. Como puede verse en el cuadro 2, el *stock* de capitales fuera del sistema financiero llegó a máximos históricos de 30.000 millones de dólares en esos años, mientras que la fuga se mantuvo en niveles altos, excepto en 1988. Sin embargo, Grinspun también consideraba relevante el financiamiento del BCRA del Tesoro como el déficit cuasi fiscal (es decir, el que surgía de los intereses pagados y cobrados por el BCRA) en un contexto recesivo (Grinspun, 1987: 8-15). Como se observa en el cuadro 3, en la mayor parte del periodo el resultado fiscal fue negativo, especialmente el financiero (es decir, contabilizando los intereses de la deuda), pero también contribuyó el déficit cuasi fiscal con el descontrol monetario y el endeudamiento interno del sector público.

Así, el Plan Grinspun planteó actuar sobre las tres principales brechas macroeconómicas: fiscal, ahorro-inversión y externa. Sobre la primera, el enfoque era gradualista, en la medida en que propuso corregir los factores de creación de los medios de pagos, comenzando por una reducción del déficit fiscal. En materia de recortes de erogaciones, se debían reducir los excesivos gastos militares y los be-

Cuadro 2.
Cuenta corriente y fuga de capitales en millones de dólares, 1980-1989

AÑO	CUENTA CORRIENTE	FUJA (flujo)*	FUGA (stock)
1980	-4.774	4.706	15.633
1981	-4.712	7.790	23.424
1982	-2.353	6.451	29.875
1983	-2.436	2.339	32.214
1984	-2.495	738	32.952
1985	-952	808	33.760
1986	-2.859	102	33.862
1987	-4.235	3.797	37.659
1988	-1.572	-2.062	35.597
1989	-1.305	7.481	43.078

Nota: (*) tanto el flujo como el stock de la fuga de capitales corresponden a las estimaciones de Basualdo y Kulfas (2001) con el método residual del balance de pagos.

Fuente: elaboración propia sobre la base de las memorias del BCRA (1980-1988) y Basualdo y Kulfas (2001)

neficios y subsidios dados a firmas sin solvencia y "los favoritos del régimen" –grupos económicos– (Grinspun, 1989) que representaban una fuente potencial de gasto público a sectores concentrados en virtud de las desgravaciones impositivas y regímenes promocionales del Estado (Ortiz y Schorr, 2021). En materia de aumento de los recursos, era necesario avanzar en una reforma impositiva que au-

Cuadro 3.
Déficit de caja del sector público (en porcentaje del PBI), 1984-1988

PERIODO	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADOS PRIMARIOS	INTERESES PAGADOS	RESULTADO GLOBAL (SPNF)*	DÉFICIT CUASIFISCAL	DÉFICIT SPNF+BCRA
1984	31,44	34,8	-3,36	3,37	-6,73	-2,5	-9,23
1985	38,82	36,42	2,4	8,31	-5,91	-2,2	-8,11
1986	36,96	35,25	1,71	4,6	-2,89	-1,6	-4,9
1987	30,4	31,29	-0,89	3,59	-4,48	-1,6	-6,08
1988	28,97	30,17	-1,2	1,86	3,06	-2,6	-5,66

Nota: (*) Sector Público Nacional no Financiero.

Fuente: elaboración propia sobre la base de FIEL (1990: 22)

mentara los ingresos sobre los mayores contribuyentes, reduciendo el peso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el total imponible. A su vez, se debía actuar sobre el otro foco de desequilibrio monetario: el déficit cuasi fiscal. Para esto, sostuvo Grinspun, era clave una reforma financiera que redimensionara el sistema bancario con la reducción de sucursales, priorizando las entidades de capital nacional y las ligadas a economías regionales. En este sentido, se debían revertir los excesivos incentivos a la renta financiera, la dolarización de carteras y especulación instaurados con la reforma de 1977 (Frenkel y French-David, 1983; Lajer Baron, 2019). En segundo lugar, se debían atender los adelantos de la Cuenta de Regulación Monetaria (CRM),[4] reformulando la ley de entidades financieras para reducir el efecto expansivo y recobrar por la vía impositiva los 7700 millones de dólares que perdió el erario público en seguros de cambio,[5] sobre todos los destinados a empresas trasnacionales y oligopolios (Grinspun, 1989).

Así, sobre la base del frente fiscal, tributario y financiero se podría, en una etapa posterior, lograr mecanismos de financiamiento genuino, captando el ahorro en el mercado interno y desarrollando un plan de obras públicas tendientes a modernizar la infraestructura productiva y social (Pesce, 2006). Como sostuvo el ministro, la ampliación del mercado interno, el crecimiento del producto, el aumento del consumo y la inversión pública y privada productiva serían la plataforma de reindustrialización con foco en las industrias básicas (petrolera, petroquímica, química pesada, siderurgia, celulosa y papel, cemento, entre otras) y de bienes de capital (Grinspun, 1989). La condición de posibilidad para financiar las inversiones con recursos propios estaba en la efectiva implementación de la reforma tributaria y financiera que permitirían revertir los incentivos a la fuga de capitales y la presión sobre el dólar (Ferrer, 1983). En materia del sector externo,

[4] Con referencia al mecanismo para regular los encajes remunerados del BCRA desde la reforma de 1977. Según la óptica de Grinspun, la CRM contribuía con la excesiva expansión monetaria en un contexto recesivo y de desconfianza remunerando los depósitos con altas tasas de interés. Como puede verse en el cuadro 3, defendía Grinspun, este mecanismo contribuía con el déficit cuasi fiscal que fue relevante en todo el periodo y que contribuía con el deterioro del balance del sector público.

[5] Con los seguros de cambio el Estado garantizó para las empresas privadas un tipo de cambio futuro por debajo de la devaluación y del nivel general de precios para cancelar sus deudas en moneda extranjera. De esta manera, se trasladaba el riesgo devaluatorio al sector público, ya que el BCRA absorbía la diferencia entre el tipo de cambio de contrato y futuro.

Cuadro 4.
Inflación mensual y tasa de interés nominal,* 1984-1988 (%)

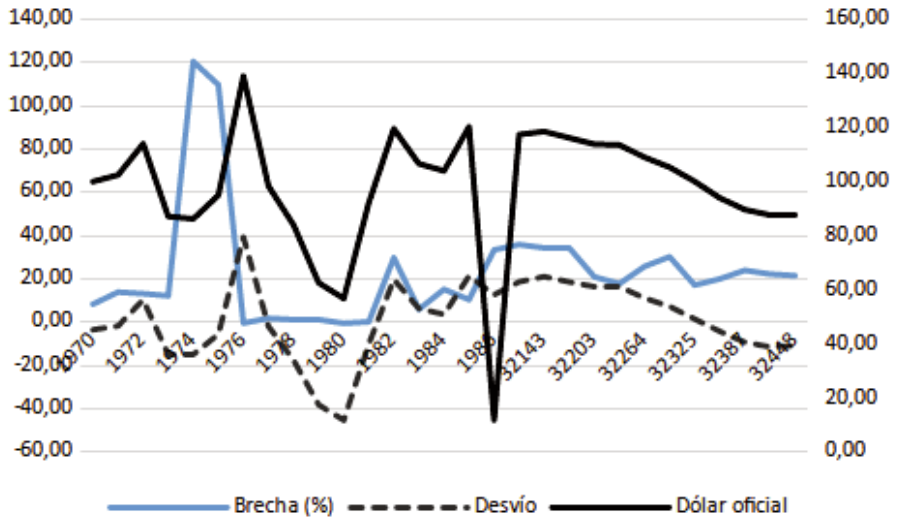
MES	1984		1985 (363)		1986 (81,9)		1987 (174,8)		1988 (387,7)		1989 (4.923,9)	
	IPC	Tasa	IPC	Tasa	IPC	Tasa	IPC	Tasa	IPC	Tasa	IPC	Tasa
Enero	11,4	11,5	26,1	17,52	2,7	4,5	7,4	7	9	13	8,9	12,5
Febrero	15,9	10	20,7	18	1,8	4,5	6,5	7	10,4	14	9,6	20,7
Marzo	18,4	10,1	25,7	20	5,5	4,5	8,2	4	14,8	14,4	17	23,3
Abril	19,7	13	29,5	24,13	4,1	4,5	3,6	5,5	17,2	15,3	33,4	56,1
Mayo	18,8	13	24,6	30	4,7	4,5	3,9	6	15,7	17,8	78,5	163,6
Junio	16,6	15,5	29,6	15,2	4,5	5	8,2	8	18	19,6	114,5	160, 5
Julio	15,5	15,5	6,5	3,5	6,5	5	10	9	26,6	20,3	196,6	37,7
Agosto	21,9	15,5	3,1	3,5	8,8	7	13,8	12	27,6	13,8	37,9	13
Septiembre	24,7	15,5	2	3,5	7,5	6	11,8	13	11,7	10,9	9,4	7,6
Octubre	15,4	17	1,9	3,1	5,8	7	19,4	15	9	10,6	5,6	6,5
Noviembre	14,7	17	2,9	3,1	5,5	7	10,3	15	5,7	11,1	6,5	10
Diciembre	23,2	17	2,8	3,1	4,7	7	3,5	12	6,9	12,6	40,1	68,3

Nota: (*) tasa efectiva mensual activa a 30 días en el segmento regulado y libre desde 1987.
Fuente: elaboración propia sobre la base de las memorias del BCRA (1988: 27-35) y FIDE

Grinspun puso en el centro la importancia de renegociar los pagos de intereses por la deuda y controlar el movimiento de capitales (de corto plazo y fugados) como base para diseñar una política cambiaria que permita anclar la inflación, moderar los efectos de un tipo de cambio alto y recuperar reservas (Gerchunoff y Llach, 2019). Como puede verse en el cuadro 4, los niveles de inflación eran críticos al comienzo de 1984 –de más del 10% mensual y en aumento– y el tipo de cambio se encontraba en niveles de equilibrio del balance de pagos de acuerdo con una estimación de paridad teórica (ver gráfico 2).

Particularmente, al ministro le preocupó que la sobrevaluación del tipo de cambio necesaria para atender las obligaciones externas no provocara una excesiva presión sobre el ritmo de crecimiento de los precios y una caída de los salarios reales que atentara contra la recomposición de los ingresos de la clase trabajadora. Por esto, el frente externo debía abordarse con activas negociaciones entre

Gráfico 2.
Brecha entre el dólar oficial y paralelo (%), desvío del tipo de cambio de paridad teórica* (eje izquierdo) y tipo de cambio real –dólar oficial– (eje derecho), 1970-1986 y enero-noviembre de 1988



Nota: (*) calculado a partir del ajuste de la cotización del dólar en el periodo base (julio de 1986/junio de 1969 = 0) con la evolución de los precios mayoristas internos.

Fuente: elaboración propia sobre la base de FIDE, Mercado e INDEC

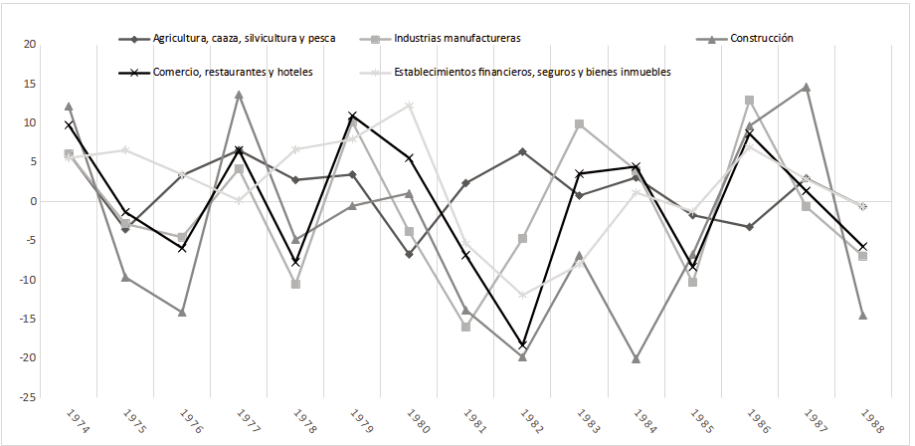
deudores y acreedores para intentar reducir los beneficios de los segundos y modificar las políticas proteccionistas de los países desarrollados, las altas tasas de interés internacionales y la presión de los organismos internacionales para cerrar acuerdos que evitaran ajustes recesivos (Rapoport, 2020). Esto es, debía evitarse devaluar más y, en cambio, conseguir mejores condiciones en el marco del llamado Consenso de Cartagena desarrollado entre países deudores de la región (Connell, 1988), instancia que generó preocupaciones evidentes en el gobierno de Estados Unidos (CIA, 1986). El ordenamiento del sector externo sobre la base de las negociaciones externas y la presión por mejores condiciones financieras y de comercio internacionales debían permitir recomponer las divisas del BCRA y evitar que la dinámica de crecimiento impactara negativamente en el balance de pagos (Schvarzer, 1984; Damill y Frenkel, 1988; Grinspun, 1989).

En este marco, avanzó el Plan Grinspun, que entonces propuso lograr un crecimiento del 5% del PIB anual, limitar los desembolsos a los acreedores por la deuda externa al 15/20% de las exportaciones, suspender los pagos financieros para el FMI hasta el 30 de junio mientras se investigaba la deuda, aumentar los salarios reales en un 8% anual, bajar la inflación de forma gradual con una reducción del déficit, una concertación de precios y aumento de los ingresos tributarios, combatiendo la evasión fiscal y fijando mayores impuestos sobre la riqueza (BCRA, 1984: 2; Rapoport, 2020). Esto permitiría reducir las transferencias del BCRA al Tesoro, pero también las realizadas al sector privado de la economía, moderando el déficit y la expansión vía CRM (Lajer Baron, 2019). Así, como puede verse en el cuadro 3, el resultado primario mejoró en 1984, pero los intereses de la deuda y el déficit cuasi fiscal contribuían con el desequilibrio global. Incluso, sin poder avanzar en la reforma tributaria y financiera por la falta de consenso en el Congreso, en el primer caso, y por las negativas del presidente del BCRA, García Vázquez, en el segundo (Restivo y Rovelli, 2011; Rossi, 2025). Por su parte, las tasas de interés reguladas fueron negativas hasta el último trimestre de 1984 en que se acordó un programa de ajuste con el FMI (ver cuadro 4), lo que incentivó una mejora del nivel de actividad durante la primera mitad de 1984 y un aumento de la participación del sector privado en el crédito que pasó del 58% al 65% frente al público (Grinspun, 1989: 38; Pesce, 2006). En materia cambiaria, se mantuvo un tipo de cambio único controlado y fijado por el gobierno de forma periódica, aunque a partir del fracaso de la concertación regional con deudores (Caputo, 9/5/1984) y a partir del acuerdo *stand by* con el FMI desde septiembre de 1984 comenzó a ser ajustado al alza para mantener la competitividad internacional junto con la liberalización de las importaciones y controles de capitales (Calcagno, 1985; Brenta, 2019).[6]

Previamente Grinspun envió una carta de intención al FMI para negociar la deuda externa como parte de una iniciativa de fortaleza nacional y exigió preservar los aumentos salariales iniciados y no limitar las importaciones necesarias para

[6] Además de las reuniones de Cartagena, Quito y Montevideo en las que también el canciller Dante Caputo defendió esta postura, Grinspun participó activamente en el Consejo de las Américas en Nueva York durante febrero, en la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo en Punta del Este en marzo y del Comité Interino del FMI en Washington en abril (Cumbre de Quito, 1984 y Consenso de Cartagena, 1985).

Gráfico 3.
Evolución del producto por sectores (variación porcentual, 1977-1988)



Fuente: elaboración propia sobre la base de las memorias del BCRA

mantener el crecimiento de la economía (Brenta, 2019). No obstante, el ministro debió ceder al *stand by* forzado por el entonces asesor Raúl Prébisch y Enrique García Vázquez.[7] Luego de ignorar la carta de intención del ministro, hacia diciembre de 1984, el FMI forzó y aprobó un *stand by* con medidas de ajuste fiscal y monetarias que convalidaban el ajuste salarial y del gasto público y aprobó un financiamiento por 1200 millones sujeto a las medidas. A partir de entonces, se activó el financiamiento con el FM y el BID, comenzaron las negociaciones con el Club de París por las deudas impagas en alrededor de 6788 millones de dólares y se reestructuraron los plazos con los bancos comerciales, destrabando 4200 millones de dólares. Sin embargo, las medidas de ajuste impactaron en el aumento de la tasa de inflación (ver cuadro 4) y la merma del nivel de actividad –con excepción de la construcción (ver gráfico 3)– mientras continuaban cayendo los precios internacionales. También, pese a la reducción del déficit fiscal, continuó el

[7] Mercado (19/1/1984). "Exclusivo: el balance de García Vázquez" (18).

alto déficit cuasi fiscal del BCRA y el desequilibrio en el frente externo con alta inflación, propiciando la salida de Grinspun (Olmos, 2006; Brenta, 2019).

Pese al desborde inflacionario en 1984 aumentó el PIB un 2,6%, el consumo un 6%, el salario medio y la participación de los asalariados en el ingreso nacional en 14%, en se evidenciaron los esfuerzos del ministro y su equipo (Grinspun, 1989: 88). Según sostenemos, la política de Grinspun fracasó al fallar la articulación de los acuerdos externos con otros deudores que intentó con el Canciller Caputo, mientras que en el frente interno no pudo concretar la reforma tributaria en el parlamento (Rossi, 2025). Por último, también resulto truncó su intento por investigar la deuda externa, dado que la negativa de García Vázquez, quien confirmó en la planta mayor del BCRA a funcionarios de la última dictadura (Olmos, 2006; Restivo y Rovelli, 2011) impidió realizar esa tarea al funcionario designado, Jaime Baintrub –en colaboración con Aldo Ferrer, Alfredo Concepción y Arturo O'Connell–, quien concluyó que la deuda externa mostraba una cifra inexplicable por más de 20.000 millones de dólares gestada entre 1976-1987 (Baintrub, 1988). Esta iniciativa también frustró el intento de Grinspun por formular una reforma financiera integral, revirtiendo la de 1977 e intentando jerarquizar la banca nacional y la superintendencia del BCRA, moderando la excesiva valorización financiera.[8] Cabe recordar que estas iniciativas por investigar los ilícitos económicos fueron defendidas por Alfonsín y plasmadas en la plataforma electoral con la intención de identificar qué parte del endeudamiento fuera legítimo (Alfonsín, 1982; UCR, 30/7/1982: 27). En este marco se intentó, por ejemplo, en la Comisión de Investigaciones del Senado, formada por parlamentarios justicialistas y radicales, examinar el llamado caso Ítalo, que consistió en la investigación de la estatización de la empresa de electricidad con el aparente objetivo de beneficiar capitales extranjeros en prejuicio del erario público por unos trescientos millones de dólares. Los parlamentarios, que en su momento intentaron detener a Martínez de Hoz, Adolfo Diz, Guillermo Klein, entre otros funcionarios de jerarquía, consideraban que este caso era solo una de las maniobras ilegales y plagadas de siniestros desplegadas en materia económica por la dictadura (Congreso de la Nación, 1985; Comisión

[8] Reformas que fueron desarrolladas y plasmadas en un programa vasto mientras era secretario de Planificación en 1985 y dado a conocer con un bajo perfil público por pedido de Alfonsín en 1986 (Torre, 2021). Puede consultarse en MECON (1986).

Especial Investigadora, 1985). Finalmente, cuando funcionarios radicales comenzaron las tratativas con los grupos económicos –identificados como Grupo María– como Macri, Fortabat, Pérez Companc y Techint, para diseñar un plan económico a espaldas de Grinspun, como fue el caso del ministro del Interior Antonio Trócoli y miembros de la Junta Coordinadora (como Enrique Nosiglia), contribuyeron a deslegitimar aún más la estrategia de Grinspun, empujando su salida por pedido del presidente (Torre, 2021: 131).

La irrupción del Plan Austral y el cambio de estrategia económica

En febrero de 1985 se produjo el cambio de ministro de Economía y durante los primeros meses del año el equipo de Juan Sourrouille, secundado por Adolfo Canitrot, José Luis Machinea y Mario Brodersohn, entre otros, se abocó a la preparación del plan de estabilización Austral. El Plan tuvo dos dimensiones fundamentales: en primer lugar, la corrección y reacomodamiento de precios relativos –tarifas, tipo de cambio, salarios, etc.–, para prepararlos para un congelamiento (como puede verse en el cuadro 4, los ajustes llevaron la tasa de inflación a niveles de alrededor del 25% mensual). En segundo lugar, se renegoció el *stand by* caído con Grinspun con el FMI y se aceptaron las medidas de ajuste fiscal y monetario y el programa financiero con el organismo y los acreedores, financiando un desequilibrio del balance de pagos en 1985 por 4200 millones de dólares (BCRA, 1986: 3-4; Machinea y Fanelli, 1988), a los fines de afrontar la mayor parte de los intereses de la deuda como puede verse en el cuadro 1. Además del congelamiento, entre las medidas identificadas como heterodoxas se contó con el cambio de moneda del peso argentino por el Austral, restándole tres ceros a la moneda, con el fin de transmitir confianza (Rozenwurcel, 1985). Como se esperaba una desinflación, se instrumentó una tabla de desagio para evitar injusticias redistributivas que pactaba la conversión entre pesos y australes por día y con un porcentaje decreciente. Así, el ajuste de precios funcionó como un "colchón" previo al congelamiento, en que se flexibilizaron los controles de los precios industriales, del ganado vacuno y de las tarifas. Estas últimas, entre abril y junio aumentaron un 27,5% en términos reales, el tipo de cambio abandonó la devaluación diaria del 1,32% y el 11 de junio subió 18% (de 642 a 748 pesos).[9] Los salarios fueron indexados en un 90% a la in-

[9] Mercado (23/1/1986). "Todos los pronósticos" (20).

flación mensual pasada, es decir, un 22% (BCRA, 1985: 5-6). Por su parte, la resolución ME475 subió los derechos de exportación de entre el 0-4% a un 10% más, aumentó los de importación 10% y redujo los reembolsos a la exportación 10% para aumentar los ingresos (De Pablo, 2005).

También se aumentó la recaudación impositiva con leyes de reforma tributaria y un ahorro obligatorio. La primera (Ley 23.256) rigió durante dos años y aportó el 40% del impuesto a las ganancias de 1984, mientras que el segundo permitió cierta estabilidad financiera tras remunerar los ahorros a una tasa baja –la de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro– y capitalizar a un año de plazo (De Pablo, 2005). También se creó un segmento a tasa no regulada, a responsabilidad patrimonial de cada entidad, y en el regulado se redujeron los elevados encajes que dejaban de ser compensados, moderando la CRM (Bleger, 1985). La proyección fiscal fue cerrar 1985 con un déficit del 2,5% (incluido el cuasi fiscal) financiado de forma genuina con créditos externos[10] y se aclaró, desde un principio, que "mientras persistan las expectativas inflacionarias, la tasa real de interés se va a mantener alta y ello condicionará el ritmo de la actividad económica" (Sourrouille, 14/6/1985). El Plan Austral logró reducir los niveles de inflación mensual de más del 20% al 2% a partir de septiembre de 1985 (ver cuadro 4) y, evitando recalentar la economía (ya que muchos sectores, como puede verse en el gráfico 3, solo repuntaron hasta los niveles de 1978), mantuvo una tasa de interés real alta la mayor parte del periodo como se observa en el cuadro 4. En materia de agregados monetarios, entre julio y marzo de 1986 la base monetaria aumentó 53% en términos reales. Dentro de esta, el dinero que no devenga interés creció 56% y el crédito al sector privado un 15%, remonetizando la economía (Lajer Baron, 2018). En lo inmediato, el plan permitió una fuerte baja de la inflación de tasas mensuales de casi el 30% mensual al 2-3% y una recuperación de la actividad económica del PIB del 4,4% en el cuarto trimestre de 1985 contra el trimestre anterior. El aumento del PIB industrial fue de más del 12% durante el cuarto trimestre del año, aunque el salario industrial y del sector público perdieron poder adquisitivo

[10] Lo cual, si bien mejoró notablemente dado que entre 1984 y 1985 el déficit fiscal pasó del 7,4% al 3,6% y el cuasi fiscal del 2,5% al 2,2%, fue imposible de cumplir. Y que, según el equipo económico, no pudo sostenerse dado el poder de presión del Congreso y les trabajadores para aumentar el déficit (BCRA, 1985 y 1986).

durante el segundo semestre de 1985, estando todos por debajo del nivel alcanzado en julio posestabilización y de los niveles máximos que tuvieron en 1984 con la gestión de Grinspun (BCRA, 1986: 209). Así, el PIB en 1985 cayó -5%, pero en 1986 se recuperó 5% y, la inversión bruta fija que cayó en 1985 12%, se recuperó en 1986 un 8% (FIDE, 1/1990: 15-18).

En mejores condiciones, por el éxito de la baja de la inflación el gobierno obtuvo un éxito electoral en las elecciones de medio término de noviembre de 1985. A partir de entonces tomaron mayor impulso las discusiones sobre la necesidad de reformar el Estado y su papel en la economía motivadas por el FMI, pero particularmente desde el BM (Bacha y Feinberg, 1989). Aunque el Plan Austral permitió un escenario de recuperación económica desde 1986, debió enfrentar problemáticas de fondo como la injerencia de los grupos económicos locales, los conflictos con la Confederación General del Trabajo (CGT) y, particularmente, la inflexibilidad del FMI por reducir el déficit a niveles de 2,5% del PIB con un limitado financiamiento disponible (Brenta, 2019). Además, pese a la reactivación de la actividad, se advirtió que no se concretaban inversiones que permitieran vaticinar el aumento del crecimiento mientras persistiría la inflación y la restricción externa.[11] Además, la reducción del déficit fue conseguida gracias a la recaudación permitida por el efecto Olivera Tanzi (que habría dado ingresos en alrededor del 5% del PIB, subiendo del 18,19% del producto al 22,05% en 1985 y al 22,34% en 1986) y no a un redimensionamiento del gasto o un aumento de los ingresos (Gerchunoff y Llach, 2019).

Sin embargo, entre 1985 y 1986 el ministro de Economía anunció proyectos de inversión en los sectores petroleros, petroquímicos y de acería por millones de dólares liderados por el sector privado. Otros tantos se esperaba que provinieran de líneas de financiamiento con organismos internacionales para financiar exportaciones y modernización del sector agrario (MECON, 1989). Muchos de estos habían sido previstos por Sourrouille en un programa previo mientras fuera secretario de Planificación, cargo que pasó a ocupar Grinspun.[12] El énfasis en em-

[11] Mercado (26/6/1986). "La reactivación de 1986" (27).

[12] Por ejemplo, previó impulsar el sector hidrocarburífero, gasífero y agropecuario como sectores clave para incentivar las exportaciones y fomentar el pago de la deuda externa (SP, 1985).

prender medidas de reforma estructural contó con la alianza con los grupos económicos que fue tejiendo el gobierno con el llamado Grupo María, que reunía a los capitanes de la industria que lideraban grupos económicos diversificados como Astara (Braun), Beagley (Núñez), Bagó (Bagó), Saab Scania/Celulosa Jujuy (Khul), Ledesma (Blaquier), Madanes/Fate Aluar (Madanes), Impsa/Pescarmona y Alpargatas Grupo Roberts (Gamboa) (Ostiguy, 1990; Birle, 1997). En virtud de esto, el equipo económico integró la propuesta proexportadora de Lavagna, identificada como "industrializar hacia afuera"[13] por el economista justicialista, y le entregó la Secretaría de Industria (fusionando Industria y Comercio Exterior). Así, se anunció un nuevo régimen de las exportaciones que implicaría un reembolso del 15% de estas y reducciones en los fletes y los precios de insumos importados bajo el compromiso de aumentar los envíos al exterior en dos millones de dólares por firma al año. El programa fue bautizado como Argex (argentina exporta), con el cual se proponía exportar tres dólares por cada dólar importado, recuperar entre 1,02 y 1,20 por cada austral no recaudado y una expansión por exportaciones estimada en quinientos millones de dólares anuales.[14]

En febrero de 1986 se lanzó formalmente la llamada segunda etapa del Austral con las propuestas de privatización para transferir las acciones del Estado de siderúrgicas como SOMISA y Atanor (21% estatal y valuada en sesenta y cinco millones de dólares) y petroquímicas como Bahía Blanca, General Mosconi (100% estatal y valuada en 250 millones de dólares) y Río Tercero (46% estatal y valuada en 113 millones de dólares).[15]

Como se sostuvo, los fondos obtenidos por esta operación se destinarían a la modernización y el desarrollo industrial. El encargado de la tarea de negociar las privatizaciones fue Marcelo Kiguel –director del BANADE entre 1983 y 1985 y luego secretario de Control de las Empresas Públicas entre 1985 y 1989, identificado por *Clarín* como "el señor de las privatizaciones" –, quien reconoció que había posibilidades de efectos negativos como desempleo y concentración empresarial en

[13] Clarín (4/12/1985). "Recambios en Economía. Los extrapartidarios" (23).

[14] Mercado (24/4/1986). "Reportaje a Roberto Lavagna. Buscando el rumbo" (35).

[15] Mattone, R. (20/3/1986). "El modelo radical" (34), Mercado.

la propuesta. Sin embargo, el Estado mantendría el control en aspectos como inversiones, precios, producción y exportaciones en que organismos como la secretaría de Comercio Interior y Exterior tendrían "mucha participación" a la hora de planificar las actividades privadas con el dinero recaudado por las operaciones de privatización.[16]

Las contradicciones sobre las privatizaciones se hicieron evidentes cuando al proyecto de ley enviado por el Ministerio de Economía se le superpuso uno concertado por diputados de la UCR liderados por Hugo Socchi y otro justicialista del peronismo renovador tutelado por José Luis Manzano. La controversia estuvo en SOMISA, dado que los proyectos de los radicales "históricos" y de los renovadores buscaban dejarla afuera de las privatizables, pero también en torno a otros temas como el control en la formación de monopolios.[17] Sin embargo, el proyecto finalmente no logró pasar el test parlamentario y se empantanó hasta 1988.

En abril de 1986 se salió del esquema de congelamiento de precios y el tipo de cambio se rigió por una política de devaluaciones no preanunciadas y Machinea aclaró que debían respetarse los ajustes necesarios y que no era posible aumentar el salario mínimo vital o móvil como pedía la CGT, asegurando que de lo contrario "habrá un nuevo rodrigazo".[18]

Los esfuerzos en materia de estabilización se centrarían en mantener los precios en el orden del 2/3% mensual intentando conciliar los intereses de los acreedores y de los grupos económicos mientras se congelaba la situación distributiva desfavorable para la clase trabajadora. En este marco, Brodersohn –secretario de Hacienda– propuso una reforma tributaria que disponía que los contribuyentes del impuesto a las ganancias que no pudieran respaldar el incremento de sus patrimonios al 31 de diciembre de 1985 pagarían un único impuesto especial de entre 6% y 12%. Esta medida beneficiaba los incrementos patrimoniales

[16] Clarín (6/4/1986). "Una charla con Marcelo Kiguel, secretario de control de gestión de las empresas públicas" (26).

[17] Clarín (19/10/1986). "¿Qué será privatizable?" (24).

[18] Mattone, R. (24/4/1986). "Ajuste o rodrigazo" (18). Mercado.

del ejercicio 1980-1985, e implicaba una condonación de impuestos omitidos y de multas virtualmente impagas. Como se argumentó, estas medidas permitirían regularizar divisas, títulos y propiedades y supuestamente se canalizarían en la inversión en la economía real. Se advertía que, para evitar que fueran a la inversión especulativa, debían confluir con el régimen de capitalización de la deuda externa que el equipo económico diseñó en el marco de las anunciadas privatizaciones. En octubre, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados introdujo modificaciones sustantivas para el proyecto: se eximió de los beneficios del blanqueo a los tenedores de títulos de deuda externa, se definió la creación de un fondo destinado a infraestructura social –escuelas y hospitales– con lo recaudado, se excluyó de los beneficios a funcionarios públicos y se impuso que los fondos recaudados fueran coparticipados.[19] Esto perjudicó los planes del equipo económico y, según Brodersohn, no les permitió cumplir la meta fiscal.[20]

Como contrapartida, Brodersohn se encargó de modificar sustancialmente un proyecto de ley de reforma financiera presentado por el radicalismo –retomando las ideas de Grinspun– para el equipo económico. Este derogaba la reforma de 1977 y ponía en el centro un "sistema financiero al servicio del sistema productivo". Las medidas concretas establecían la actividad financiera como un servicio público, legitimando un activo poder de control e intervención en manos del BCRA, prohibían las actividades realizadas por fuera del reconocimiento legal, distinguiendo diferentes tipos de entidades autorizadas para operar en el mercado, la banca oficial quedaba autorizada para actuar de forma prioritaria en la promoción de actividades productivas y se limitaba la actividad financiera extranjera en la radicación de capitales mínimos, en las operaciones entre firmas vinculadas y en el volumen de depósitos captados en relación con el financiamiento promovido. También se establecían normas más estrictas para operar como controles de solidez y eficiencia.[21] El proyecto, que impulsaba un sector del radicalismo y que

[19] Clarín (3/10/1986). "Restricciones para el blanqueo" (25).

[20] Clarín (25/1/1987). "Reportaje a Mario Brodersohn. Entrevista de Alcaldía Oña y Marcelo Bonelli" (20). Finalmente, el blanqueo fue aprobado en febrero de 1987, con las modificaciones que resistió el equipo económico del gobierno.

[21] Clarín (24/9/1986). "Ingresó al Congreso el proyecto del Ejecutivo" (22).

retomaba las ideas de Grinspun, fue apoyado por el Poder Ejecutivo. Cuando el proyecto llegó a Brodersohn y a Machinea, ya habiendo removido al radical Concepción y a sus colaboradores Portnoy, Baintrub y Treber del BCRA desde agosto de 1986 –quienes tenían un perfil más heterodoxo y cercano a Grinspun–, sufrió cambios radicales. Entre los más relevantes, se admitió la existencia de diversas compañías financieras y su actuación en el crédito como cajas de crédito y sociedades de ahorro y se las habilitaba para financiar la compra de vivienda mientras que el proyecto de Grinspun solo habilitaba a bancos. También se aceptó la operatoria crediticia entre empresas vinculadas y se revocó la categoría del sistema financiero como servicio público y se flexibilizó la categorización de extranjera a las entidades, eliminó el secreto bancario beneficiando a capitales foráneos y se modificó la exigencia de garantía integral de los depósitos definida por el proyecto de Grinspun.[22] Paradójicamente, Machinea reconocía la existencia de escándalos públicos por liquidaciones de entidades financieras y que había deficiencias de control y corrupción en el sistema financiero, como ocurrió entonces con el Banco Alas,[23] cuando el funcionario debió reconocer que desparecieron carpetas con documentación de este y otras entidades que realizaban operaciones de comercio exterior, dando cuenta de las incompetencias en el interior del BCRA.[24]

Adicionalmente, el gobierno desplegó como parte de las reformas una progresiva baja de retenciones, incluso antes de contar con una reforma tributaria o impuesto sustituto como el que se debatía sobre la tierra. Así, los derechos de exportación

[22] Clarín (25/9/1986). "La influencia del BCRA" (22).

[23] Hubo, en este caso, funcionarios de carrera del BCRA detenidos y otros indagados (Clarín (28/9/1986). "Escándalo bancario" (1)). Aunque Kiguel aseguró que no existían casos similares, posteriormente se dieron a conocer otros tras investigaciones del juez Néstor Blondi como el del Banco de Pringles (Clarín (3/10/1986) "Maniobras con exportaciones" (22)). También trascendió el caso del Banco Buen Ayre, acusado en la justicia por presentación de balances falsos, junto con los funcionarios como Concepción, Portnoy, Da Corte y Mazzorín por incumplimiento del deber público (Clarín (15/10/1986). "La denuncia contra ex funcionario del BCRA y del Banco del Buen Ayre" (24-25)).

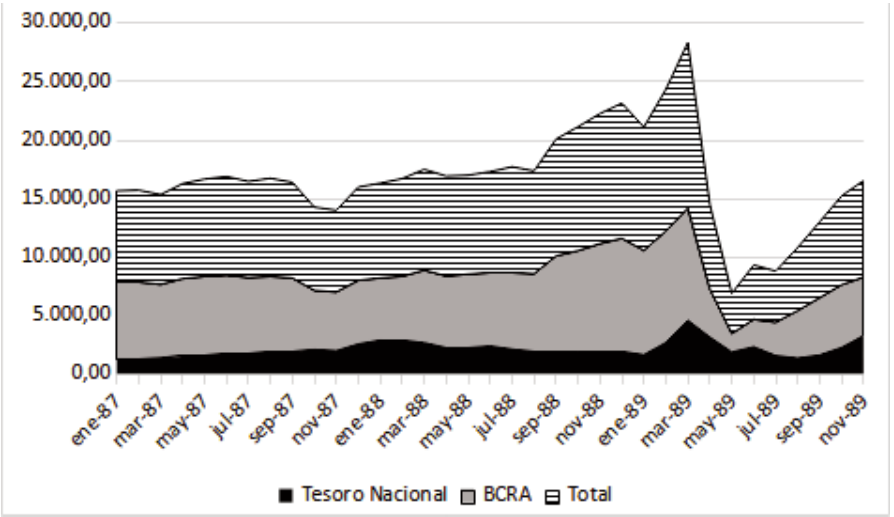
[24] Clarín (26/9/1986). "Informe en diputados" (16-17). En aquel entonces, hubo acusaciones cruzadas entre Kiguel y Treber y entre los mandos de Machinea y Concepción por la desaparición de documentación (Clarín (27/9/1986). "Director y exdirectivo del BCRA cruzan duras acusaciones" (14)).

que llegaron a máximos desde 1982 comenzaron a reducirse desde 1985 en todos los sectores agropecuarios desde niveles de entre el 25% y el 20% a niveles de entre el 10% y el 0% y hasta hacerse insostenible en 1988 y 1989 cuando vuelven a subir (Rossi, 2015: 5). Esto daba cuenta de la prioridad que adquiría para el equipo económico la estrategia exportadora, pero también de la presión de las cámaras sectoriales ante los deprimidos precios internacionales. Por otro lado, se retomó la cuestión de la reestructuración del sector público en el marco de "la construcción de un nuevo consenso económico" (Sourrouille, 29/8/1986: 25). En este orden, se volvieron a anunciar las transferencias al sector privado de empresas siderúrgicas y petroquímicas como Petroquímica Bahía Blanca S.A. y Petroquímica General Mosconi, S.A., aunque las iniciativas fracasaban dada la no aprobación parlamentaria y la falta de interés del sector privado.

Del deterioro económico a la reforma estructural de los organismos internacionales

Mientras que en 1987 las reformas se empantanaron en el Congreso, el deterioro macroeconómico siguió avanzando y el gobierno atribuyó los rebrotes inflacionarios al consumo "estimulado de forma desproporcionada" (Sourrouille, 29/8/1986). Por ello, como puede verse en los cuadros 2 y 3, el resultado primario volvió a deteriorarse en 1987, mientras que el déficit cuasi fiscal siguió siendo alto y la fuga de capitales, excepto el año 1988, persistió en niveles elevados con el aumento de la incertidumbre. También se responsabilizó al presidente del BCRA que asumió con la salida de Grinspun, Alfredo Concepción, por no llevar adelante una política monetaria lo suficientemente restrictiva. La inflación llegaba al 8% y hacia abril de 1987 se tomaron nuevas medidas de estabilización con el llamado "australito", y ahora con Machinea como presidente del BCRA se implementó una devaluación periódica del tipo de cambio, convalidación de aumentos de precios industriales y de las tarifas (todos en el orden de entre 2 y 3%) y se anunció una política monetaria restrictiva. En un comienzo, la tasa de inflación bajó en los meses de octubre, noviembre y diciembre a cifras cercanas al 5-4% mensual. Paralelamente, se alcanzó un acuerdo por la deuda externa donde se refinanciaron 30.000 millones de dólares a 19 años con un periodo de gracia hasta 1994 y se negoció una rebaja en las tasas (Sourrouille, 29/8/1986). La euforia del equipo económico por este hecho, sin embargo, pronto se desmoronó cuando, tan temprano como septiembre de 1987, Brodersohn tuvo que declarar públicamente que no podían cumplir con

Gráfico 4.
Deuda remunerada del sector público consolidado, 1987 y 1989 (millones de dólares corrientes)



Nota: (*) ajustado por cotización promedio del dólar oficial.
Fuente: elaboración propia sobre la base de FIDE y BCRA

el compromiso fiscal del FMI de reducir el déficit del 7% al 2% en el ejercicio de 1987 ni con los intereses que permanecían en cuatro mil millones de dólares anuales (ver cuadro 3), especialmente aquel año en que hubo un deterioro notable del resultado comercial (ver cuadro 1).[25] El equipo económico se aferró a una política monetaria más dura con altas tasas de interés, como se evidencia en el cuadro 4, y esto produjo fisuras por las crecientes licitaciones de Bonex que absorbían pesos para evitar una corrida, convalidando altas tasas de interés que terminaron en el desplazamiento de Lavagna. Como puede verse en el gráfico 4, el problema cuasi fiscal creció notablemente, más que el endeudamiento del Tesoro, dado que parte de los intereses que este pagaba se registraban en el resultado del BCRA (Cavallo, 1985: 16), hasta el quiebre de la hiperinflación hacia mediados de 1989.

[25] Clarín (3/9/1987). "Declaraciones de Brodersohn en Viena" (27).

Adicionalmente, el equipo económico se aferró a las reformas estructurales que imponían los organismos internacionales (FMI, 1985; World Bank, 12/5/1988), rechazando el programa que dio a conocer Grinspun de reformas (el mencionado Plan Nacional de Desarrollo), como el que solicitó, paradójicamente, el Poder Ejecutivo al gobierno japonés, considerado en aquel entonces un ejemplo de desarrollo económico, el cual fuera diseñado por el reconocido economista Saburo Okita y un equipo de expertos. Este último, cabe mencionar, fue dado a conocer públicamente y discutido en foros empresariales entre 1986 y 1987, caracterizado por una visión crítica tanto de las fallas de la industrialización sustitutiva como de la política económica de la dictadura. El vasto programa diseñó una estrategia que privilegiaba el orden macroeconómico –con un diagnóstico heterodoxo– y el incentivo del Estado a sectores preferenciales, tanto primarios como industrializados, con el fin de impulsar la integración de la economía de forma gradual y controlada, procurando elevar los niveles de vida (JICA, 1987; Ferrer, 1991). Ambas propuestas desplegaban un mayor grado de intervención y planificación económica en materia de reindustrialización, rediseño de políticas de incentivos productivos y recuperación de la inversión pública como elemento clave. Sin embargo, Sourrouille comenzó a aceptar una postura de crítica al Estado, asegurando que debía resolverse "la crisis de una economía cerrada y un Estado sobrecargado de funciones [en definitiva] una estructura anacrónica que se resiste a desaparecer y que lleva a la exacerbación de conductas especulativas y a la defensa a ultranza de los intereses sectoriales" (Sourrouille, 29/8/1986). La estrategia exportadora y la reforma del Estado comenzó a defenderse, pero en virtud de combatir los "feudos cerrados y apéndices deficitarios de un Estado ineficiente" (Sourrouille, 27/9/1987: 10). En esta línea, también se instrumentaron políticas como la apertura del capital privado en el sector petrolero con el Plan Houston y el Plan Megatel, aunque mostraban las iniciativas de diferentes sectores de la UCR.

El primero fue reglamentado con el Decreto 1443 desde agosto de 1985 y con la Ley 17.319 que facultó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a convocar a concurso público internacional la celebración de contratos para exploración y explotación hidrocarburífera. Como rigió, las empresas asumían todos los riegos en el periodo de prospección de hasta tres años, una posterior explotación de hasta cuatro años y un año posterior para proponer la comercialización. Se reconocería el 12% de regalía a favor del Estado y entre un 8-18% de canon a favor de YPF

sobre el valor de la producción total y el resto a las empresas contratistas (De Pablo, 2005). La cuestión de YPF atravesó en 1987 un debate sobre qué reforma encarar ya que había un proyecto impulsado desde la Secretaría de Energía –Lapeña– y otro desde el directorio de la firma, liderado por su presidente Rodolfo Otero (quien se mostraba menos afecto a la participación privada en la explotación). En este marco, tanto Enrique Olivera –presidente del Directorio de Empresas Públicas creado a fines de 1986 como un *holding* para centralizar la administración de firmas que no fueran a privatizarse– como Pedro Trucco (ministro de Obras y Servicios Públicos en 1986) tuvieron que declarar en los medios que no existían discrepancias entre los funcionarios, dando cuenta del debate interno por YPF.[26] Sin embargo, estos episodios derivaron en la renuncia de Olivera, que cuestionó al equipo económico por demorar decretos que permitieran la autonomía presupuestaria de las empresas públicas boicoteando la recomposición de los ingresos de sus trabajadores.[27]

En este contexto, solo se habló de reestructuración de la petrolera, pero no de privatización, lo que significaba alinear los precios internos con los internacionales (Forcinito y Tolón Estellares, 2009). Sin embargo, YPF mantenía una deuda de mil millones de dólares desde la dictadura y un quebranto (diferencia entre ingresos y egresos) de entre 100 y 300 millones de dólares entre 1984 y 1987.[28] En un contexto de producción estancada, comenzó a hablarse de necesidades de importación por 150 millones de dólares para 1987 y de 400 millones de dólares para 1988, producto de una combinación de factores como la lentitud del Plan Houston, el aumento del consumo interno y la paralización de las inversiones públicas y privadas. El malestar entre Trucco, Otero, Rodolfo Terragno (ministro de Obras y Servicios Públicos en 1987), Sourrouille, Lapeña y Alfonsín trascendió a la prensa. En aquel entonces, una reunión entre los funcionarios y los petroleros privados (Pérez Companc, Astra, Pluspetrol, entre otros) se conoció como el Plan Olivos. En este marco, se anunció una serie de beneficios como retribuciones

[26] Clarín (24/1/1987). "Confirmó Trucco que a la brevedad YPF será reestructurada" (12).

[27] La Nación (28/5/1987). "Olivera renunciará al holding al no obtener respuestas a sus reclamos" (14).

[28] Mercado (30/7/1987). "El naufragio de YPF" (42-58).

fiscales, de precios internacionales, libertad de importación y exportaciones de petróleo y derivados, entre otras cuestiones. Sin embargo, los empresarios petroleros exigían que YPF liderara las inversiones necesarias en exploración y explotación, evidenciando las contradicciones y la dificultad de movilizar las inversiones.[29]

Por su parte, el Plan Megatel fue impulsado con el Decreto 1748 en septiembre de 1985 con el fin de financiar una expansión del servicio telefónico. De esta forma, se facultó a la empresa telefónica ENTEL a realizar un concurso público para seleccionar empresas locales que fabricaran los productos e insumos necesarios en electrónica, fibra óptica, equipos, etc. Como en muchas otras empresas de relevancia, la privatización era una facultad del Congreso, y en el caso de ENTEL el secretario de Comunicaciones Juan Manuel Magliano reconoció que se estudiaba la conversión a una sociedad anónima –es decir, el cambio en su estructura legal–; pero no una privatización. Mientras tanto, se convocó a licitación privada para renovación y ampliación de centrales telefónicas, desatando una ardua competencia entre firmas extranjeras como Siemens y Alcatel y la nacional Pecom-NEC (de Pérez Companc), las cuales involucraban costos de entre trescientos y quinientos millones de dólares según la propuesta. Oportunamente, tras los contratos de Megatel con Standart Electric y Siemens y el énfasis de la francesa Alcatel por entrar al negocio, se habló de una "guerra de los teléfonos" en alusión al interés de los capitales internacionales.[30]

No obstante, Magliano reafirmó que "la sociedad anónima es una idea que nos atrae porque permite captar capitales y dar participación a usuarios, gremios e inversiones; pero el gran interrogante es hasta qué medida se justifica entregar la administración de una empresa pública".[31] Las declaraciones del funcionario dejaban en claro que había firmas de alta rentabilidad como ENTEL que no

[29] Mercado (30/7/1987). "Gruneisen: en 1988 habrá que importar petróleo por 400 millones de dólares" (48).

[30] Clarín (12/12/1987). "Reportaje al secretario Magliano" (18).

[31] Reportaje a Juan Manuel Magliano en: Mercado (26/11/1987). "Con Alcatel tendremos en cuenta factores políticos" (42-43).

estarían sujetas a privatización. A su vez, en el ámbito de la telefonía móvil se gestionaron las licitaciones para el campo de la telefonía celular y conglomerados empresarios nacionales y extranjeros como Citibank, Motorola, Macri, Techint, Ericson, Pérez Companc, Sociedad Comercial del Plata, entre otros, competían por entrar en un negocio que involucraba capitales por doscientos millones de dólares hacia mediados de 1988. Sin embargo, la posterior crisis económica y el Plan Primavera interrumpieron el acuerdo por las inversiones.

Pese a que comenzaba a evidenciarse un diagnóstico crecientemente ortodoxo en las posturas de Sourrouille, como se ha visto muchas de estas propuestas de reforma surgidas en el interior del radicalismo no bregaban un retiro total del Estado. Como lo expresó Lacerca, Secretario de Industria, no se trataba de un programa de transformación económica primarizador, ya que se esperaba que el Estado controlara la inversión privada en sectores como la industria celulosa y de papel, la textil, la siderometalúrgica o la química pesada e incentivara la informática reivindicando el caso japonés.[32] Otra de las propuestas en este sentido fue la del informe Scandinavian Arways System (SAS) de Terragno (1988), que planteó una asociación entre la firma escandinava y la estatal Aerolíneas Argentina, que tenía una deuda externa de 639 millones de dólares. El acuerdo enviado al Congreso en 1987 plateó que SAS era una empresa pública con participación de capitales noruegos, suizos y daneses que no comprometían intereses expansionistas al otorgarle el 40% de las acciones. El Estado, por su parte, conservaba el 51% y les trabajadores un 9%, mientras que la firma extranjera desembolsaría cien millones de dólares frescos y cien para inversiones, mientras que la Secretaría de Hacienda, por su parte, absorbería la deuda externa. Sin embargo, hacia fines de 1988 todavía se esperaba un debate parlamentario que finalmente nunca llegaría.[33] Hacia febrero de 1988 se evidenciaron las presiones de los organismos internacionales para avanzar más rápidamente y tras la presión del BM y el FMI se anunció en rueda de prensa una rebaja de aranceles a la importación en la industria siderúrgica y petroquímica. No obstante, la iniciativa se interrumpiría cuando en los primeros meses de 1988 la inflación superó el 15% mensual y los atrasos con bancos co-

[32] Carlos Lacerca en: Mercado (18/4/1985). "¿Hay política industrial? Entrevista" (18).

[33] Mercado (24/11/1988). "La hora de la verdad" (43).

merciales acumularon 1100 millones de dólares imprimiendo incertidumbre acerca del rumbo económico.

En agosto de 1988, dado que la inflación había vuelto a los niveles del 20% mensual (ver cuadro 4), se lanzó el plan de estabilización llamado Primavera, en un contexto en que estaban interrumpidos los acuerdos con el FMI y los acreedores y se acumularon atrasos por casi dos mil millones de dólares, y se contó con el apoyo explícito del BM. En aquella oportunidad, se aprobó un préstamo puente del Tesoro Norteamericano por quinientos millones de dólares sin el requisito de un acuerdo previo con el FMI, y se contó con la visita del primer funcionario del organismo George Schultz en señal de apoyo. El Plan Primavera fue identificado como un último intento de estabilización tendiente a llegar a las elecciones ante la escalada de la inflación en niveles del 30% mensual. Proyectado para septiembre de 1988, fue adelantado para el 15 de agosto y, finalmente, anunciado el 2 de agosto luego de dos feriados bancarios, demostrando el descontrol de la situación. Este, que contó con los más estrechos colaboradores de Economía, también incluyó la participación consultiva de Krieger Vasena, aunque funcionarios como Terragno amenazaron con renunciar.[34] Se trataba de un plan de ajuste tendiente a corregir los desequilibrios de corto plazo con el fin de continuar "implementando el vasto programa de reformas iniciado en 1987, el cual se asienta sobre tres componentes interdependientes: la integración de la economía argentina al mundo, la modernización del Estado y la desregulación de los mercados" (BCRA, 1988: 4). La colaboración con el BM fue tal que su vicepresidente, Sahid Husain, pidió una oficina en Buenos Aires para trabajar de forma más estrecha con el equipo económico, y ante las críticas se instaló a los funcionarios del BM en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, asegurándoles una voz privilegiada (Torre, 2021). Así, el programa que proveyó el BM, documentado en el *Argentina Economic Recovery and Growth* (World Bank, 1987), fue ratificado por el equipo de Sourrouille quien defendió la necesidad de avanzar en la apertura comercial rápida, un ajuste fiscal sustentado sobre el gasto público –con particular énfasis en las empresas del Estado y el ajuste a la clase trabajadora– y, posteriormente, una reforma financiera que desregulara las tasas de interés y simplificara la estructura de entidades y bancos, consolidando gran parte de lo iniciado en 1977 (MECON, 8/1988).

[34] El Cronista Comercial (2/8/1988). "El nuevo Plan" (15).

El BM anunció el mayor préstamo a un país endeudado por 1250 millones de dólares sin el aval del FMI, se instrumentó una devaluación del 11,4% y un desdoblamiento del mercado cambiario en que las exportaciones agropecuarias se liquidaban en el comercial y las industriales se repartían un 50% en el comercial y otro 50% en el financiero a un tipo de cambio mayor (Rapoport, 2020). También se instrumentó un congelamiento de precios entre el 2 y el 15 de agosto, con aumentos mensuales pactados en 1,5% a partir de septiembre, del 3,5% en octubre y del 5% en diciembre, previa negociación de salarios. Este último, acordado con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), fue el que motivó a Alfonsín a hablar de un acuerdo entre "producción y democracia".[35] Por su parte, se proyectó reducir el déficit fiscal al 2% del PIB con una política monetaria restrictiva, la paralización de obras y el retiro voluntario de empleados públicos.[36] En materia comercial, se redujeron los derechos de exportación en más de quinientos productos industriales y se eliminaron tres mil posiciones arancelarias (Torre, 2021). La reforma cambiaria del Primavera temporalmente desalentó la demanda de divisas, aumentó la monetización y disminuyó la asistencia financiera del BCRA (tras reducir la inflación y las tasas de interés). Sin embargo, se trató de factores temporales porque la dinámica estructural e inercial de la inflación no se detenía y la política monetaria liderada por Machinea, que aplicó altísimas tasas de interés desde octubre (ver cuadro 4), retomó la dureza de altas tasas de interés: "esta vez no bajaremos la guardia", aseguró.[37] La política de estabilización convalidaba altas tasas de interés reales para mantener los depósitos en el sistema formal y remunerar la deuda interna, generando presión sobre el dólar ante la falta de reservas. Esto explica también, más allá del alto *stock* de capitales fugados, que el flujo de capitales al exterior se redujera también respecto de la última dictadura (Ortiz y Schorr, 2021), dada la alta rentabilidad de la deuda local.[38]

[35] La Nación (13/8/1988). "Apoyo empresario al Plan antinflacionario" (1).

[36] Atentó contra esta estrategia la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 18% al 15% para la industria.

[37] Ámbito Financiero (2/12/1988: 2).

[38] Silvetti, E. (27/10/1988). "Proteccionismo. El desorden de la apertura". Mercado.

Las presiones del BM y el FMI aumentaron y se manifestaron en las largas gestiones de Canitrot para concertar con las cámaras empresarias la reforma para reducir el arancel medio a cambio de aportes financieros por pérdidas de recaudación. No obstante, Carlos de la Vega, titular de CAC, y Eduardo de la Fuente, titular de la UIA, criticaron que era una apertura de "urgencia coyuntural".[39] Sin embargo, la iniciativa reformista intentada por el gobierno y luego bajo la presión de los organismos internacionales debería abandonarse ante la crisis económica. Hacia octubre de 1988 ya se hablaba de un atraso cambiario, como se observa en el gráfico 2, y comenzaron las especulaciones en la prensa económica acerca de cuánto aguantaría el gobierno. El economista Cavallo declaró que la política económica era una de "después de mí, el diluvio"[40] y las encuestas comenzaron a dar ganador a Carlos Menem en las elecciones de 1989,[41] aumentando la vulnerabilidad. Machinea, por su parte, se aferró más a una política monetaria dura, manteniendo las tasas de interés en el orden del 13% mensual con una inflación del 8%. Sin embargo, desde 1988 el BCRA vendía perdiendo reservas por más de mil millones de dólares anuales, como se detalla en el cuadro 1, y, entre enero y octubre, la prensa económica denunciaba el aumento de la demanda de particulares en cifras récord (BCRA, 1989: 10-12). La situación era tan crítica que la desmonetización de la economía se redujo de los promedios del 5% del PIB en 1986, 1987 y 1988 al 2,5% a comienzos de 1989. El gobierno instrumentó oportunas devaluaciones, especulando con un aumento de la liquidación de divisas por parte de los exportadores, pero esto no funcionó y agravó las condiciones de incertidumbre. Sumado a la ruptura de las negociaciones con la banca y a las dificultades para seguir obteniendo préstamos del FMI y el BM comenzó a detonar una crisis cambiaria. La huida de australes en activos financieros y depósitos en dólares se explicaría (y excusaría) según el presidente del BCRA por una crisis enteramente política.[42] El punto de inflexión llegaría cuando la primera semana de febrero el BCRA suspendiera la venta de dólares y en mayo de 1989 comenzara la hiperinflación (ver cuadro 4).

[39] Ibid.: 4-6.

[40] Mercado (22/12/1988). "Dulce y Amargo. Reportaje a Domingo Cavallo" (34).

[41] Mercado (23/2/1989). "El barómetro electoral" (16).

[42] José Luis Machinea en: Ámbito Financiero (6/7/1989). "Desde diciembre de 1986 las reservas nunca superaron los 2500 M".

Reflexiones finales

El periodo retenido en este trabajo y correspondiente al gobierno de transición democrática cuenta con una multiplicidad de abordajes de diferentes episodios de la economía política. Los abordajes que fueron desde la dinámica de acumulación, de las transformaciones heredadas de la dictadura hasta el funcionamiento de un nuevo modelo de valorización financiera acorde con el ascenso del neoliberalismo han destacado de forma temprana y reciente. También se cuentan investigaciones sobre temas puntuales como el papel de los empresarios y de los organismos internacionales, como más generalmente de la política económica. Sin embargo, los estudios de esta naturaleza, y específicamente que retengan la singularidad del periodo, que centren la interpretación de este como un interregno hacia la consolidación del neoliberalismo son escasos. Por esto, hemos enfatizado, implícitamente, la importancia de resaltar episodios, archivos y temáticas específicas que aún requieren de un análisis más profundo para conocer mejor el periodo y formular interpretaciones novedosas. Especialmente aquellas que trasciendan la comprensión de esta etapa como la de un gobierno encerrado en sus limitaciones, aun así no se contradiga esta, pero sí se enriquezca.

Dentro de lo presentado en este trabajo y a modo de síntesis, considero que deben destacarse los siguientes recortes en virtud de que constituyen agendas de reciente y potencial investigación para el campo de la historia económica del periodo. En primer lugar, la discusión sobre la investigación de la deuda externa que, según diferentes documentaciones citadas, fue impulsada por el mismo presidente Alfonsín y por un sector del radicalismo merece el análisis de las tensiones existentes en el interior de la UCR y el rol de los políticos en el parlamento, entre otras posibles dimensiones. De la misma forma, debe resaltarse la tensión entre el Ministerio de Economía (Grinspun) y el BCRA (García Vázquez) sugerida por algunos trabajos como derivada de la discusión en torno a la necesidad de implementar una reforma financiera después de los cambios trascendentales de 1977, y dar cuenta de cómo esto impactó en la política económica del primer ministro del gobierno democrático. Por último, sobre la etapa 1983-1985, todavía faltan trabajos que expliquen de forma más acabada y con interpretaciones novedosas el impacto del intento de concertación con otros países deudores de la deuda externa en el plan económico del gobierno. Como evidenciamos, la estrategia

defendida junto al canciller Caputo no produjo resultados concretos y se debilitó ante la presión de los acreedores y el FMI para forzar a los países a negociar caso por caso, desplazándolos de toda injerencia e influencia en decisiones y variables reales de la economía mundial. De la misma forma, evidenció la preocupación de Estados Unidos por evitar la organización de los países en vías de desarrollo. Estas cuestiones, o algunas de estas, pueden contribuir a entender el periodo de forma más robusta y superar el diagnóstico ortodoxo que entiende el Plan Grinspun de forma simplista a partir del fracaso en controlar el déficit fiscal y la inflación.

Por otro lado, sobre la etapa 1985-1989, se subrayan los siguientes episodios. En primer lugar, la importancia de identificar el programa de estabilización Austral (1985) más allá de la política de estabilización, es decir, reteniéndolo como el infructuoso camino para implementar reformas económicas. Cabe destacar, complejizando el diagnóstico ortodoxo que habitualmente solo considera la apertura comercial irrestricta, la desregulación financiera –de sistema cambiario y monetario–, la privatización de las empresas públicas y la baja de la inversión del Estado como motores de crecimiento. Así, los intentos de reforma económica intentados por sectores del radicalismo y la oposición en diferentes sectores (financiero, tributario, comercial, hidrocarburífero, telefónico, promocional, etc.) forman parte de las diferentes propuestas alternativas a la ortodoxia que, pese a su fracaso, emergieron en aquel contexto. En este mismo sentido, deben entenderse dos de ellas concretamente, el PND de Grinspun y el Informe Okita, dos propuestas ambiciosas de reforma económica que requieren ser contextualizadas y analizadas en los estudios sobre el periodo. No menos importante resulta, por otra parte, y sobre la fase final de la gestión de Sourrouille, el lugar preponderante que adquirió el BM, además del que tenía el FMI, desde el Plan Primavera. Esto, contemplando tanto el programa que proveyó como el que diseñó en aquel contexto el equipo de Sourrouille, subsumiéndose a sus recomendaciones de ajuste económico y reforma económica que, en aquel contexto de debilidad política y deterioro macroeconómico inflacionario y en la brecha fiscal y externa, resultaron en un fracaso. Este último, en términos de política económica, estuvo dado por la inefectividad de una tasa de interés real alta que, a cambio de sostener el precio del dólar y los precios en niveles relativamente bajos por un tiempo, deterioraba el resultado fiscal y cuasi fiscal, creando las condiciones para una corrida ante la inflexibilidad de los acreedores.

Bibliografía

Aboy Carlés, G. (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Rosario: Homo Sapiens.

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) (1987). Estudios sobre el desarrollo económico de la República Argentina. Informe final. JICA.

Alfonsín, R. (1982). "Deuda externa. 29 de diciembre de 1982". Unión Cívica Radical.

Azpiazu, D.; Basualdo, E. y Khavisse, M. (1987). *El nuevo poder económico en la Argentina de los 80*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bacha, E. y Feinberg, R. (1989). "Cuando la oferta y la demanda no se cruzan: América Latina y las instituciones de Bretton Woods en la década de los ochenta". En Bouzas, R. (comp.), *De espaldas a la prosperidad: América Latina a fines de los ochenta*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

Baintrub, J. (1988). *Endeudamiento argentino. Periodo 1976-1987*. Buenos Aires: Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina (BCRA) (2006-2025). *Memoria Anual (1975 a 1990).* Buenos Aires: BCRA.

Basualdo, E. (2006). *Estudios de historia económica argentina: desde mediados del siglo XX a la actualidad.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Basualdo, E. y Kulfas, M. (2001). "Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina". *Realidad Económica*, n° 17, 76-103.

Belini, C. y Korol, J. C. (2020). *Historia económica de la Argentina durante en el siglo XX*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Birle, P. (1997). *Los empresarios y la democracia en la Argentina. Conflictos y coincidencias*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

Bleger, L. (1985). "Banco Central: mayor control y ajuste recesivo". *Realidad Económica,* n° 63, 20-41.

Botzman, M. y Tussie, D. (1989). "Argentina y el ocaso del Plan Baker. Las negociaciones con el Banco Mundial". *Boletín Techint*, n° 265, 63-81.

Bouzas, R.; Keifman, S. y Echegaray, R. (1987). *Informe sobre la coyuntura económica internacional.* Buenos Aires: FLACSO.

Brenta, N. (2019). *Historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri.* Buenos Aires: Capital Intelectual.

Calcagno, A. (1985). *La perversa deuda argentina*. Buenos Aires: Legasha.

Caputo, D. (9/5/1984). "Discurso del Sr. Canciller Dante Caputo". Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Castellani, A. (2006). "Los ganadores de la 'década perdida'. La consolidación de las grandes empresas privadas privilegiadas por el accionar estatal. Argentina 1984-1988". En Pucciarelli, A. (coord.), *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires: Siglo XXI.

Cavallo, D. (1985). "Inflación y déficit fiscal en 1984", *Mercado* n° 811, 14-16.

Center Intelligence Agency (CIA) (1986). "The Cartagena Group: Politicizing the Debt in Latin America". Washington, D. C.: Directiorate of Intelligence.

Comisión Especial Investigadora (1985). "Parlamento: El caso Ítalo". *Realidad Económica,* n° 62, 90-94

Congreso de la Nación (1985). *Informe y conclusiones de la Comisión Especial Investigadora. El caso Ítalo (t 1)*. Buenos Aires: Cámara de Diputados.

Connell, A. (1988). "La coordinación de los deudores latinoamericanos: el Consenso de Cartagena y el Grupo de los Ocho". *Estudios Internacionales*, vol. 21, n° 83, 373-385.

Consenso de Cartagena (1985). *El Trimestre Económico*, vol. 205, n°52, 267-272.

Crenzel, E. (2025). *Pensar los 30.000*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Cumbre de Quito (1984). "Perfil de una estrategia para superar la crisis regional". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n° 3.

Damill, M. y Frenkel, R. (1988). "Malos tiempos. La economía argentina en la década de los ochenta". Documentos del CEDES, n° 46.

De Pablo, J. C. (2005). *La economía argentina en la segunda mitad del siglo XX (t. 2).* Buenos Aires: La Ley.

Ferrer, A. (1983). *Vivir con lo nuestro.* Buenos Aires: El Cid.

_____ (1991). "Perspectivas heterodoxas en el informe Okita. Acerca de la economía argentina". *El Trimestre Económico*, vol. 58, n° 231, 497-520.

_____ (2004). *La economía argentina: desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI.* Buenos Aires: FCE.

Fondo Monetario Internacional (FMI) (1985). "Memorándum de entendimiento con el FMI". *El Trimestre Económico*, vol. 50, n° 208, 1186-1191.

Forcinito, K. y Tolón Estellares, G. (2009). *Reestructuración neoliberal y después…1983-2008: 25 años de economía argentina*. Los Polvorines: UNGS.

Frenkel, R. y French-David, R. (1983). "La apertura financiera externa: el caso argentino". *El Trimestre Económico*, nº 47, 1-56.

Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) (1990). "Gasto y déficit cuasifiscal". *Boletín Informativo Techint,* n° 261, 21-33.

Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) (1/1990). *Indicadores de Coyuntura. Anexo Estadístico XXX*. Buenos Aires: FIDE.

Gerchunoff, P. y Llach, L. (2019). *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*. Buenos Aires: Emecé.

Godio, J. (1991). *Historia del movimiento obrero argentino, 1955-1990. De la Resistencia a la encrucijada menemista*. Buenos Aires: Legasa.

Grinspun, B. (1987). Plan Nacional de Desarrollo, 1987-1993. Buenos Aires: Secretaría de Planificación del Ministerio de Economía.

_____ (1989). *La evolución de la economía argentina desde diciembre de 1983 hasta septiembre de 1989*. Buenos Aires: Ediciones radicales.

Lajer Baron, A. (2019). "Reforma y contrarreforma. 1976-1991: de la liberalización a la crisis del sistema financiero". En Rougier, M. y Sember, F. (coords.), *Historia necesaria del Banco Central de la República Argentina. Entre la búsqueda de la estabilidad y la promoción del desarrollo*. Buenos Aires: Lenguaje Claro.

Libman, E.; Palazzo, G. y Rodríguez, M. (2022). "El dilema de la estabilización: deuda, inflación y conflictividad política en tiempos de Alfonsín (1983-1989)". En Gerchunoff, P.; Heymann, D. y Jáuregui, A. (comps.), *Medio siglo entre tormentas. Fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina (1948-2002).* Buenos Aires: EUDEBA.

Machinea, J. L. y Fanelli, J. M. (1988). "El control de la hiperinflación: el caso del Plan Austral, 1985-1987". En Bruno, M.; Di Tella, G.; Dornbusch, R. y Fischer, S. (comps.), *Inflación y estabilización. La experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México*. México, D. F.: FCE.

Ministerio de Economía (MECON) (1986). *Plan Nacional de Desarrollo 1987-1991.* Buenos Aires: Secretaría de Planificación.

____ (8/1988). *Programa para la recuperación económica y el crecimiento sostenido.* Buenos Aires: MECON.

____ (1989). *Política para el cambio estructural en el sector público. Mensaje de los proyectos de leyes de presupuesto 1986-1989*. Buenos Aires: Secretaría de Hacienda.

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) (2024). *Exportaciones por destino. Serie anual 1980-2022*. Buenos Aires: Centro de Economía Internacional.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS) (1989). El salario mínimo en Argentina: alcance y evolución (1964-1988). Documento de Trabajo n° 18. Buenos Aires: Dirección Nacional de Recursos Humanos y Empleo.

Novaro, M. (2009). *Historia Argentina. Argentina en el fin de siglo. Democracia, mercado y nación (1983-2001).* Buenos Aires: Paidós.

Ocampo, J. A. (2014). "La crisis latinoamericana de la deuda a la luz de la historia". En Ocampo, J. A.; Stallings, B.; Bustillo, I.; Velloso, H. y Frenkel, R. (comps.), *La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica*. Santiago de Chile: CEPAL.

Olmos, A. (2006). *Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron, ¿quiénes y cómo la contrajeron?* Buenos Aires: Continente.

Ortiz, R. y Schorr, M. (2021) "¿Década perdida? Los grupos económicos en el gobierno de Alfonsín". En Schorr, M. (comp.), *El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros días.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Ostiguy, P. (1990). *Los capitanes de la industria. Grandes empresarios, política y economía en Argentina de los años 80*. Buenos Aires: Legasa.

Pesce, J. (2006). "Política y economía durante el primer año del gobierno de Alfonsín. La gestión del ministro Grinspun". En Pucciarelli, L. (coord.), *Los años de Alfonsín ¿el poder de la democracia o la democracia del poder?* (413-430). Buenos Aires: Siglo XXI.

Rapoport, M. (2020). *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003).* Buenos Aires: Crítica.

Restivo, N. y Rovelli, H. (2011). *El accidente Grinspun. Un ministro desobediente.* Buenos Aires: Capital Intelectual.

Rossi, G. (2015). "Retenciones: larga historia de tensiones". Bolsa de Comercio de Rosario. *Informativo Semanal Mercado*, n° 1737, 1-5.

Rossi, I. (2024). "El Bimestre Político y Económico: el proyecto editorial de la transición democrática (1982-1984)". PolHis, n° 34, 95-124. Disponible en: https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/501.

_____ (2025). *Transición y política económica. El Plan Grinspun en perspectiva histórica.* Los Polvorines: UNGS.

Rozenwurcel, G. (1985). "La economía hasta fin de año". *Realidad Económica*, n° 63,15-25.

Schvarzer, J. (1983). "Problemas para la reactivación industrial. Fundación para una política industrial Argentina", *Cuaderno*, n° 4.

_____ (1984). "Crisis económica: la carencia de modelos para enfrentarla exige una firme determinación política". *El Bimestre Político y Económico*, nº 13, 1-5.

_____ (1986). *La política económica de Martínez de Hoz*. Buenos Aires: Hyspamérica.

Secretaría de Planificación (SP) (1985). *Lineamientos de una estrategia de crecimiento económico, 1985-1989*. Buenos Aires: MECON.

Sourrouille, J. V. (14/6/1985). "Plan Austral. Mensaje del ministro Juan Sourrouille por radio y televisión". Buenos Aires: MECON.

_____ (29/8/1986). "Mensaje del ministro Juan Sourrouille por radio y televisión". Buenos Aires: MECON.

_____ (27/9/1987). "Notas desarrolladas en la sesión vespertina del comité provisional del FMI en la ciudad de Washington". Washington, D. C.

Terragno, R. (1988). *Informe Terragno. El acuerdo con SAS. Inicio de una revolución en las empresas del Estado*. Buenos Aires: EUDEBA.

Thwaites Rey, M. (2005). "Estado: ¿qué Estado?". En Thwaites Rey, M. y López, A. (eds.), *Entre tecnócratas globalizados y políticos clientelistas. Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado argentino*. Buenos Aires: Prometeo.

Torre, J. C. (2021). *Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín*. Buenos Aires: Edhasa.

Unión Cívica Radical (UCR) (30/7/1983). "Plataforma electoral de la Unión Cívica Radical". Buenos Aires: UCR.

World Bank (WB) (1987). Argentina Economic Recovery and Growth May 19, 1987. Latin America and the Caribbean Region, Report No. 6467-AR. Washington, D. C.: WB.

_____ (12/5/1988). "To: Mr. Barber B. Cona le Through: Mr. Moeea A. Qureshi. From: S. Shahid Husain. Subject: Argentina. Brief for your Luncheon with Mr. Camdessus".

Zack, G. y Pryluka, P. (2022). "Dictadura y reforma económica. Argentina en el nuevo orden internacional". En Gerchunoff, P.; Heymann, D. y Jáuregui, A. (coords.), *Medio siglo entre tormentas. Fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina (1948-2002)* (297-329). Buenos Aires: EUDEBA.

Zícari, J. (2025). *El jefe civil de la dictadura: Martínez de Hoz. Economía, política y poder.* Buenos Aires: Continente.